

Ni austeridad ni reactivación

La celebración de Juntas Generales ha sido la ocasión para que ciertas figuras representativas del mundo de las finanzas expresen sus opiniones sobre el momento económico y formulen sus propuestas. Economistas de la oposición han repetido en los últimos días los esquemas que vienen propugnando desde hace algunos meses. Y por último, dirigentes de organizaciones empresariales han manifestado sus criterios sobre el mismo tema. Al tiempo, el Gobierno retrasa la publicación de sus intenciones sobre la materia y lo hace al parecer porque se han manifestado importantes discrepancias internas al respecto.

El Gobierno sigue decidido a promover una cierta expansión de la economía: el aumento del Producto Nacional Bruto en un 3,5 por ciento en 1977 es su objetivo; para lograrlo, la clave va a ser el aumento del consumo del sector público en un 5 por 100; y como contrapartida de este crecimiento habrá que soportar un aumento de los precios al consumo del 18 por ciento, que en la práctica muy bien podría llegar a ser del 25 por 100. El programa podría calificarse de moderadamente expansionista, con graves riesgos inflacionistas: entre otras cosas la experiencia de 1976 demuestra que el Tesoro carece de fondos y en una perspectiva electoral a nadie se le ocurre pensar que el Gobierno vaya a ser capaz de realizar una efectiva reforma fiscal en tan corto espacio de tiempo que le permita obtener los fondos necesarios para acometer tan importantes gastos de inversión del sector público.

Sería colocar el tejado antes de haber construido la casa: sin reforma fiscal, pensar en gastos públicos en sectores de alto efecto multiplicador de la actividad económica y con gran capacidad de absorción de mano de obra, para lo único que puede valer es para agravar la inflación.

De un déficit presupuestario de 80.000 millones de pesetas previsto al final de la gestión Villar Mir se ha pasado (utilizando para ello desde los aumentos impositivos vía elevación de los precios de la gasolina y otros conceptos, hasta operaciones contables cuyos efectos aún van a notarse en los primeros meses de 1977, pasando por una total reducción de las inversiones) a un déficit de 20.000 millones. ¿Pasará igual en 1977? Todo indica que si se hacen las mismas cosas se obtendrán idénticos resultados.

Sólo que, como tímidamente han anunciado algunas fuentes próximas al Ministerio de Comercio, el gasto público va a hacer falta y en proporciones importantes y a cortísimo plazo para apoyar a la exportación. No entramos a considerar los peligros de apoyos financieros excesivos a la exportación,

máxime en un momento en que renacen en todos los países occidentales los hábitos proteccionistas. Pero con peligros o sin ellos, es el único camino posible para evitar el "estrangulamiento" de la economía, tal y como decía "Información Comercial Española" la pasada semana.

Una reforma fiscal por mínima que sea es imprescindible y a corto plazo: lo malo es que un acto político de tal naturaleza sólo puede abordarlo un Gobierno fuerte y representativo.

En resumidas cuentas, la opción que propone el Gobierno Suárez es difícilmente realizable. Sin embargo, dentro del Gobierno parecen existir además disensiones respecto a la propia opción. Y las disensiones tienen un fiel reflejo en el debate que José María Aguirre Gonzalo, presidente del Banco Español de Crédito, y Rafael Termes Carreró, consejero delegado del Banco Popular Español, han mantenido imaginariamente a través de los discursos que ambos han pronunciado en las Juntas Generales del Banco de Guipúzcoa —del que también es presidente el primero— y del Popular.

En el interior del Gobierno el debate parece estar mucho más matizado y la amenaza de próximos cambios ministeriales va a calmar los ánimos de ciertos ministros. Las dos opciones posibles, siempre sin salirse del esquema actual son: una reactivación moderada con fuertes dosis de inflación huyendo de las medidas que aviven el paro, actitud que sería demasiado impopular en un período preelectoral; frente a ello otros ministros propugnan medidas más claramente antiinflacionistas y con menor intencionalidad política electoral.

Insistimos en que la batalla es en cierta medida fútil; ni lo uno ni lo otro, con la capacidad de maniobra del Gobierno y su escasa fuerza en la política económica, va a resolver el problema. Entre otras cosas porque ese propósito antiinflacionista tiene una sola traducción posible y habitual: una más sólida congelación salarial sin contrapartidas en otros órdenes, difícilmente aceptable por los trabajadores.

La pelea vale en cualquier caso para demostrar algo evidente desde hacía algunos meses: no hay cabezas visibles que dirijan la economía. No hay un rector de la política económica; unas veces es Hacienda, otras Industria, otras Presidencia del Gobierno —que hasta el momento no se ha convertido en el superministerio económico del que se hablaba—, otras el Banco de España.

Y aunque los banqueros siempre han tenido "mucho mano" en la economía, sus constantes sugerencias en el terreno de la política económica vienen a constituir casi un refrando de esta falta de dirección por parte del Gobierno: ellos son

los primeros en detectarla y por eso multiplican sus consejos. Aguirre Gonzalo ha dicho en San Sebastián que hace falta un plan de reactivación destinado a aumentar la productividad, los consumos públicos y privados para luego poder proceder a reactivar la inversión. En este proceso hay que tener cuidado con los salarios, ha dicho, porque una congelación excesiva podría disminuir la demanda. Es casi un programa de Gobierno. Faltan muchas cosas en el mismo, entre otras la reforma fiscal, a la que tanta aversión tiene la derecha.

Rafael Termes Carreró propone exactamente lo contrario. "Si el Gobierno no quiere evitar la bancarrota del país es absolutamente indispensable que ataque el problema de la inflación, porque la inflación, cuando se hace galopante, es la antesala de la quiebra nacional", añadiendo que "por tercer año consecutivo, el Gobierno (...), apartándose de las recomendaciones técnicas de sus propios expertos, opta por una decisión política". El señor Termes propone lisa y llanamente un severo plan de austeridad. "Si las elecciones legislativas hubieran podido celebrarse en marzo, que está a la vuelta de la esquina, nada habría dicho". Pero el retraso es ya excesivo y el consejero delegado del Banco Popular asegura que el Gobierno que salga de esas elecciones tendrá que tomar medidas desagradables. ¿Por qué no tomarlas ahora? Por esas necesidades políticas que antes señalaba.

Más claro lo ha dicho el Consejo Nacional de Empresarios: "el crecimiento de los salarios deberá limitarse a tasas sensiblemente inferiores a las experimentadas por el coste de la vida en el período inmediatamente anterior que se determine", mientras que "el crecimiento de las rentas no salariales deberá continuar a las disposiciones ac-

tualmente vigentes, con las excepciones y en los límites que el fomento de la inversión aconsejen". De otras cosas se le podrá acusar al equipo del señor Conde Bandrés, que libra en estos momentos una dura batalla por su supervivencia, pero nada podrá decirse de la claridad con que expresa sus pensamientos: los obreros tienen que reducir sus salarios reales, esto es, vivir peor, para que España pueda salir de la crisis. Increíble, aparte de ser económicamente contraproducente e inviable.

Agustín Rodríguez Sahagún, promotor de la Confederación Empresarial Española, que trata de sustituir desde posiciones no oficialistas al Consejo Nacional, también coincide que la inflación es el primer problema económico en estos momentos. Los economistas de la oposición coinciden básicamente en el empeño, pero plantean directamente la necesidad de soluciones políticas previas para abordarlo: con este Gobierno no se puede luchar contra la inflación ni pedir austeridad.

Y el Gobierno como si nada ocurriera: retrasa más de dos meses su nuevo programa de actuación económica, ni siquiera se atreve a aprobar el cuadro de previsiones macroeconómicas para 1977 —y ya han transcurrido seis semanas del nuevo año—. Y además da el espectáculo de su descoordinación, de sus contradicciones internas. Mientras tanto, los datos se agolpan en los teletipos: en Londres se rumorea una devaluación de la peseta del 10 por 100 para los próximos días; fuentes oficiales reconocen que la deuda exterior es superior a los 9.500 millones de dólares; el presupuesto mínimo anual para un matrimonio de dos hijos en Madrid se eleva a 278.050 pesetas (761 pesetas diarias, casi el doble de salario mínimo). ■ CARLOS ELORDI

Enseñanza

La larga marcha de los "penenes"

NO queremos privilegios, queremos los derechos mínimos de cualquier trabajador". La coordinadora estatal de penenes de instituto respondía así a uno de los argumentos esgrimidos públicamente dos días antes por el ministro de Educación y Ciencia. Claro, que mientras don Aurelio Menéndez había tenido a su plena disposición los micrófonos de RTVE para explicar al país las supuestas razones de una huelga, los afectados sólo han podido exponer las que creen sus razones en un escrito recogido por parte de la prensa. Cuestión de fuerzas.

Ahora bien, ¿cuáles son esos derechos mínimos a los que aluden

los penenes en su respuesta al Ministerio? La estabilidad en el empleo es sin duda el número uno. Estabilidad que no tiene por qué ser permanente y vitalicia, tal y como —en defensa de argumentación— había dado a entender el ministro, sino que deberá estar sometida al control democrático de los sectores interesados (claustros, alumnos, profesores, padres, etcétera), sin que, como ocurre actualmente, la criba la realicen exclusivamente los directores del colegio o los delegados provinciales del Ministerio.

Tal sistema de control público y constante del personal docente deberá sustituir, según los penenes